

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

**Medellín, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por JORGE ELIÉCER CAICEDO MARULANDA contra la ORGANIZACIÓN IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA (Radicado 05001-31-05-025-2018-00539-01).

### ANTECEDENTES

El demandante pretende por vía judicial la declaratoria de un contrato de trabajo ejecutado con la demandada entre el 05 de abril de 1997 y septiembre de 2014 cuando terminó por una decisión injustificada, para que en consecuencia, se disponga el reconocimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social por todo el tiempo laborado, la indemnización por despido sin justa causa, el pago de las cesantías, los intereses a las mismas y la sanción por su no pago, además del reintegro a su cargo y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones expuso que inició sus labores como pastor de la Organización Iglesia Pentecostal Unida de Colombia el 05 de abril de 1997. En el año 2014 fue trasladado al Municipio de Venecia - Antioquia donde se desempeñó hasta su despido. Explica que para esa anualidad se presentaron unos malos entendidos con una empleada de la Hostería Las

Palmas al levantarse un falso testimonio en su contra al afirmarse que había ingresado con una mujer que no era su esposa, rumores a partir de los cuales los directivos de la iglesia decidieron dar aplicación a sus decálogos internos, los que a su juicio van en contravía de la ley y la Constitución por violentar la vida privada de la persona. El 14 de agosto de 2015 radicó petición para obtener su reintegro al cargo de Pastor por no existir causales para su retiro forzado, recibiendo el día 31 del mismo mes y año respuesta negativa. Agregó que, durante la relación laboral, nunca fue afiliado al Sistema de Seguridad Social.

La IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA se pronunció frente al escrito inicial en oportunidad, aduciendo la inexistencia de un contrato de trabajo con el actor, y explicó que la vocación pastoral del demandante se encontraba identificada como un ministerio pastoral voluntario, siéndole permitido que se desarrollara conforme a su vocación y creencias religiosas en la iglesia, siendo designado como pastor de la IPUC en diferentes sedes del país, hasta cuando fue destituido por el resultado de diferentes procesos disciplinarios al estar involucrado continuamente en hechos vergonzosos relacionados con mujeres, entre ellas una menor de edad. Señaló que a fin de solventar sus necesidades básicas y cubrir los aportes al Sistema de Seguridad Social los miembros feligreses realizaban sus donaciones - diezmos- estando bajo su responsabilidad efectuar la respectiva afiliación y pago de las cotizaciones, además porque tenía a su disposición el fondo local de la congregación para ese fin. En ese orden se opuso a la totalidad de las pretensiones y formuló como excepciones previas y de fondo las de inepta demanda y actuación temeraria, falta de legitimación por activa y prescripción.

El Juzgado de conocimiento que lo es el Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia que profirió el 17 de mayo de 2022, CONDENÓ a la ORGANIZACIÓN IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA a reconocer y pagar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones a través de un cálculo actuarial por el período comprendido entre el 12 de octubre de 2005 y el 17 de septiembre de 2014 a la Administradora donde el actor se encuentre afiliado o elija, cálculo que deberá incluir los intereses moratorios hasta la fecha del pago sobre el IBC mensual acreditado mes a

mes y que en todo caso no podrá ser inferior al SMLMV. ABSOLVIÓ a la demandada de las demás pretensiones. DECLARÓ no probada la excepción de prescripción. CONDENÓ en costas a la enjuiciada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

La activa aspira que se revoque tal determinación señalando que las normas que regulan el servicio ministerial deben ser inaplicadas por inconstitucionales al ir en contravía con el contenido de los artículos 2° y 53 de la CP, por ir en detrimento de los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta que en el asunto fueron demostrados los elementos del contrato de trabajo que enlista el artículo 23 del CST, estando alejado de su aceptación que se concluya que se estaba ante una relación desinteresada y altruista porque el demandante siempre estuvo bajo la convicción de estar amparado por un contrato de trabajo.

La demandada por su parte, se apartó de la determinación toda vez que considera que al estar acreditado que el accionante pertenecía como Pastor al máximo órgano de administración de la iglesia pentecostal, conocía de primera mano y era partícipe en las decisiones de modificación de los estatutos que los regía, por lo que no se puede reconocer en su favor su propia culpa, en tanto los estatutos de la iglesia dejaron claro que estaba en cabeza suya la responsabilidad de la afiliación al Sistema, cuyos dineros debían ser extraídos de la congregación local que administraba, por lo que pese a existir un deber de vigilancia, no se exonera de la obligación legal que le asistía al señor Jorge Eliécer Caicedo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES**

Con base a lo anterior se tiene que el problema jurídico que compete a la Sala en esta oportunidad determinar se reduce a establecer 1) la procedencia de inaplicar las normas ministeriales, para efectos de dar cabida un contrato de

trabajo que conlleve al reconocimiento de las acreencias laborales pedidas; y  
2) Si había obligación o no por parte de la enjuiciada de vincular a su cargo al actor al sistema de seguridad social.

Sobre el primero de los puntos a resolver, debe decirse que la jurisprudencia constitucional ha definido que *“la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”*. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

También es trascendental acudir a la laicidad, entendida como una forma de Estado que busca, a través del ordenamiento jurídico, asegurar la separación entre el Estado y las religiones para poder garantizar en condiciones de igualdad el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de conciencia. En efecto, la Corte ha analizado la constitucionalidad de normas que tienen connotaciones religiosas importantes y significativas, así como otras en donde el elemento religioso es mínimo o trivial, aplicando en todos los casos parámetros similares y unificados para decidir sobre su constitucionalidad, teniendo gran relevancia el carácter secular de la relación Estado-iglesias, en cuya intención y cuyo efecto, no se contraría el principio de laicidad, así como la importancia en que las actuaciones del Estado no se confundan con el rol de las confesiones religiosas (Ver C-088-2022).

En torno a lo que se menciona, el pluralismo del Estado colombiano en materia religiosa supone y deriva de la neutralidad estatal en esta materia, siendo esa la manera como se garantiza la autonomía, la independencia y la igualdad de todas las confesiones religiosas, contando en ese orden las iglesias y

confesiones religiosas por disposición legal, con plena autonomía y libertad para establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación - Artículo 13 Ley 133 de 1994-.

Es precisamente esa libertad la que encuentra protección constitucional a partir de lo que en el artículo 19 plasmó el legislador - *libertad religiosa*-, la que se traduce en el seguimiento de un sistema moral y en la práctica de un culto, y protege a su titular frente a la coacción de terceros para obligarlo a actuar en contra de sus creencias, con lo que se materializa la dignidad humana a través del respeto a la autonomía que tienen las personas para diseñar un plan de vida y determinarse según sus creencias y convicciones, garantía que no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que éste se manifiesta, derecho que no puede consistir en una imposición del Estado ni de otra persona (Ver T124-2021).

En ese orden, surge clara la imposibilidad de inaplicar las normas que imperaron la condición religiosa del actor y a partir de las cuales se pretende la prosperidad de las pretensiones; primero, porque se carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad; segundo, porque al ser la inconstitucionalidad un procedimiento que enjuicia las disposiciones normativas que van en contravía con la Constitución, debe verificarse el desconocimiento de derechos fundamentales de forma patente y manifiesta, no siendo posible postular una inconstitucionalidad mediante una mera invocación, acudiendo a lo desfavorable que resulta a los intereses actuales, buscando restarle validez a actos surgidos de una potestad que nació precisamente como un amparo constitucional por el hecho de imponerse dentro del ejercicio de ese derecho a la libertad religiosa que da entrada a las disposiciones propias, unas limitaciones que son admisibles por razones de seguridad, orden, moralidad y salubridad públicos, y por el ejercicio de los derechos constitucionales y libertades de los demás (Ver SU626-2015), no evidenciando en el contexto planteado que hayan existido limitaciones innecesarias o arbitrarias con vulneración de otros derechos que como ciudadano ostenta el demandante; y tercero, porque adherirse a una fe o

profesar un sistema de creencias, practicar individual o colectivamente un culto, divulgarla, propagarla y enseñarla, asociarse y pertenecer a una congregación o iglesia se trató de una decisión voluntaria y atendida a la manifestación de una actividad misional, donde la prestación personal de servicios toca más bien con la vocación religiosa y sus tendencias de servicio a la humanidad, encontrando que ante una pluralidad de opciones, el señor Caicedo decidió a partir de un factor meramente espiritual y de vocación asumir un compromiso religioso desde su condición de pastor en la Iglesia Pentecostal desde hace más de quince años, lo que implicó acogerse sin imposición, al respeto de las creencias y manifestaciones del culto que practicaba, instruía y enseñaba, además de observar las obligaciones específicas del Pastor<sup>1</sup> previstas en las disposiciones internas creadas en virtud de la independencia y autonomía brindada por la Ley y la Constitución y que se hallan plasmadas en la documental conocida por el actor y aportada por la pasiva al trámite, donde reposan los estatutos, el reglamento interno, un esquema de organización, unas normas disciplinarias, unas autoridades eclesiásticas, unas faltas, unas sanciones y unos propósitos con relación a la fe profesada, lo que a la congregación le permite ser reconocida como un cuerpo organizado, especificar la forma bíblica en que deben llevar a cabo su trabajo y corregir situaciones anómalas de carácter administrativo, ético, moral, familiar y doctrinal - *Introducción Manual de la IPUC Archivo 12*- responsabilidades y límites que el señor Jorge Eliécer Caicedo aceptó y que de no compartir ni estar dispuesto a obedecer, no estaba obligado a profesar, pero una vez unido a la congregación, debía estar sujeto a acatar el sistema administrativo de la organización y el sistema económico de la Iglesia.

Es así como el actor se sometió a una organización que representa una excepción en el derecho del trabajo por tener como fin esencial la difusión de su creencia e ideología; poseer arraigo cultural y reconocimiento social; y predicarse la subordinación hacía la creencia o ideología y no respecto de determinado sujeto; además de existir un impulso de gratuidad y altruismo como bien lo definió la *a quo*, soportado en la espiritualidad o en el convencimiento del propósito del trabajo voluntario; lo que impide dotar de

---

<sup>1</sup> Sección J Manual de la IPUC (Archivo 12).

naturaleza contractual laboral a este tipo de relaciones, sin que bajo tales circunstancias pueda enrostrarse desconocimientos constitucionales que den cabida a desconocer los mandatos de la religión y otorgar responsabilidades laborales ante un escenario donde no concurren los elementos del contrato de trabajo (Ver SCL 5638 del 27 de mayo de 1993 y SL2610-2020), debiendo en este aspecto confirmarse la providencia apelada.

### *De los aportes al Sistema de Seguridad Social*

Lo que tiene que ver con este punto de inconformidad, se tiene que la Corte Suprema de Justicia ha determinado que independiente de que para este tipo de asuntos no se configure una relación de índole laboral, el deber de afiliación a la seguridad social si se extiende a todo tipo de relaciones por el solo hecho de ostentarse la calidad de ciudadano, lo que no escapa de las labores misionales.

En esa línea, aunque el señor Caicedo no estaba sujeto a una relación laboral, no se eximía a la organización de la obligación que tienen de asumir la protección a la seguridad social de quienes las integran, pues la autonomía que se les otorga, en este caso específico a las confesiones, derivada de la libertad religiosa inserta en la Constitución Política, no es de carácter absoluto, pues se reconoce un límite propio, que emana del contenido de los derechos fundamentales y del propio principio de laicidad del Estado (Ver SL9197-2017).

Así, aunque desde 1987 con la expedición del Acuerdo 041 se extendió la cobertura de los seguros sociales obligatorios a las comunidades religiosas, era de carácter facultativo como igualmente se definió en el Acuerdo 049 de 1990, pero con la expedición del Decreto 3615 del año 2005 modificado por los Decretos 2313 de 2006, 2172 de 2009 y 692 de 2010 sin mutación de las estipulaciones en este aspecto, se reguló de manera expresa la afiliación de los miembros de las comunidades y congregaciones religiosas al sistema de seguridad social integral, estipulándose en su artículo 13 que esas entidades se asimilarían a las asociaciones, y los religiosos a trabajadores independientes, lo que deja ver que aún bajo una labor carismática, desde la fecha de la vigencia de la mencionada disposición las congregaciones

contaban con la obligación de afiliar a los religiosos en razón de lo que dispone el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, encontrando lo anterior enmarcado en el principio de universalidad, donde la seguridad social debe cobijar a todos al margen del trabajo que realicen, porque es el Estado el que debe asumirla como un servicio público esencial atendiendo el contenido de los artículos 2° de la Ley 100 de 1993 y 48 de la C.P (Ver SL9197-2017).

Con base a esas reflexiones, pese a que el actor es tomado para estos efectos como un trabajador independiente, entendiendo el contexto particular del nexo debatido y el tipo de labor desempeñada con coherencia de la gratuidad del servicio que para este caso se corrobora del manual de la IPUC, Sección J literal f)<sup>2</sup> (Archivo 12), y en virtud de recaer sobre las agremiaciones religiosas el deber de solidaridad derivado de los principios de la seguridad social, es que no es posible deslindar a la pasiva de su obligación de asumir el pago de las cotizaciones, pues estaba bajo su encargo proteger al actor, no existiendo probanza idónea que permita aseverar que en el marco de ese deber se haya encargado al propio religioso de sufragar tales aportes con dineros de la congregación local que administraba, pues aun en ese contexto, la agremiación religiosa debió percatarse que esa obligación estaba siendo cubierta en debida forma.

De modo que, a ninguno de los argumentos de los apelantes se da razón, encontrando la providencia revisada ajustada a las prerrogativas legales y jurisprudenciales, lo que conlleva a que en su totalidad sea confirmada.

Sin costas en la instancia por las resultas de los recursos.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por

---

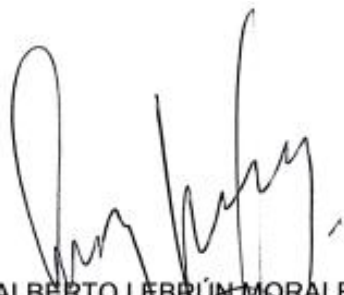
<sup>2</sup> “El trabajo ministerial es netamente espiritual y no material, por lo cual no es susceptible de retribución en sentido estricto”.



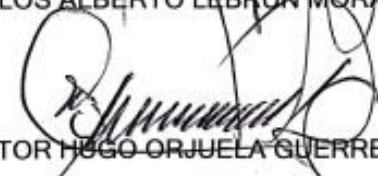
autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

Notifíquese por EDICTO.


Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>050010310502520180053901</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>JORGE ELIECER CAICEDO MARULANDA</b>
<b>Demandado:</b>	<b>ORGANIZACION IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>29/05/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 30/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario